

## PRUEBA DE DAÑO

### ***“Información relativa a medios probatorios cuya divulgación puede vulnerar los derechos del debido proceso”***

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6o., párrafo cuarto, apartado A, fracciones I y VIII, párrafo sexto, y 28, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); 113, fracción X, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 110, fracción X de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); así como Vigésimo noveno de los *“Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas”* vigentes (Lineamientos), se considera información reservada aquella que de divulgarse afecte el debido proceso.

En ese sentido, se actualiza la hipótesis de clasificación invocada, relativa a que podrá clasificarse como información **reservada** aquella cuya divulgación **afecte el debido proceso**, toda vez que la información correspondiente a ***“1. [...] el acta del comité integrado por el Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y por dos personas nombradas por el Secretario de Hacienda y Crédito Público de la sesión en la que se determino el monto máximo de remuneración para los miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México, para el año 2024. [...]”*** materia de la solicitud, **podiera constituir un medio probatorio** que tenga que ser ofrecido en el juicio de amparo promovido ante el Poder Judicial de la Federación, que se tramita ante el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región con residencia en la Ciudad de México, bajo el número de expediente 256/2024, mismo que se encuentra en trámite. Al haber señalado como acto impugnado en dicho proceso constitucional, el siguiente: *“...La determinación de la remuneración ordinaria total liquida anual neta de los miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México, tomando como parámetro máximo al del Ejecutivo Federal que fuese establecida en el PEF 2024...”*, y toda vez que dicha acta contiene la determinación motivo del acto impugnado, es claro que la divulgación de la información conllevaría un riesgo real, demostrable e identificable para los derechos del debido proceso del Banco Central y del Comité a que se refiere el artículo 49 de la Ley del Banco de México, señalado como autoridad responsable en el citado proceso constitucional. Lo anterior tomando en cuenta que se le entregaría información al solicitante sobre aspectos pendientes de ser analizados por el citado Juzgado de Distrito, lo que conllevaría hacer pública información que es materia de análisis en el citado proceso de amparo, por lo que hace a su constitucionalidad y legalidad.

Al respecto, se destaca que la Suprema Corte de Justicia de la Nación través de criterios jurisprudenciales y aislados<sup>1</sup> ha determinado que el debido proceso se integra por: **a)** Un "núcleo duro" que se identifica con la observancia de las formalidades esenciales del procedimiento, y **b)** Otro núcleo identificado comúnmente con el elenco de garantías mínimo del que se identifican dos especies:

- La primera, que corresponde a todas las personas independientemente de su condición, nacionalidad, género, edad, etcétera.

---

<sup>1</sup> 1a./J. 11/2014 (10a.) y 1a. CCLXXVI/2013 (10a.)

- La segunda es la combinación del elenco mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante la ley. Este derecho humano permite a los justiciables acceder a los órganos jurisdiccionales en condiciones de igualdad procesal, es decir, a la posibilidad real de que en el proceso o procedimiento se otorguen a las partes igual oportunidad de defender sus puntos de vista y ofrecer pruebas en apoyo de sus pretensiones.

En dichos términos, a fin de no vulnerar el derecho al debido proceso que comprende el derecho humano a la igualdad, ante la existencia de un procedimiento de amparo en trámite, sin soslayar que ese derecho es aplicable a todas las partes en el proceso o procedimiento de que se trate, lo que incluye desde luego a cualquier ente público, es que la información requerida deberá considerarse como reservada.

En relación con lo anterior, el Vigésimo noveno de los Lineamientos dispone que para que se actualice la hipótesis de reserva que se analiza, deben acreditarse los siguientes elementos:

- **Por lo que se refiere a la fracción I, relativa a la existencia de un procedimiento judicial, administrativo o arbitral en trámite:** en el caso concreto se actualiza dicho supuesto, al existir un juicio de amparo promovido ante el Poder Judicial de la Federación, que se tramita ante el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región con residencia en la Ciudad de México, bajo el número de expediente 256/2024, mismo que se encuentra en trámite, en el cual la documentación materia de la solicitud de acceso a la información es susceptible de ser ofrecida como prueba o requerida por la autoridad judicial, toda vez que dicha documentación consiste precisamente en la determinación motivo del acto impugnado en el juicio de referencia.
- **Por lo que respecta a la fracción II, en relación a que el sujeto obligado sea parte en ese procedimiento:** se señala que tanto el Banco de México como el Comité a que se refiere el artículo 49 de la Ley del Banco de México son partes demandadas o autoridades señaladas como responsables en el citado juicio de amparo con número de expediente 256/2024, radicado en el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región con residencia en la Ciudad de México.
- **Por lo que se hace a la fracción III, en el sentido de que la información no sea conocida por la contraparte antes de la presentación de la misma en el proceso:** este elemento se actualiza en razón de que la documentación solicitada constituye información que no es conocida por la contraparte del Banco Central en el juicio de amparo al que se ha hecho referencia, por lo que su divulgación podría afectar la garantía de igualdad procesal que se subsume dentro del derecho al debido proceso, en virtud de que se violenta el equilibrio para que las partes ofrezcan, les sean admitidos, preparen y desahoguen los medios probatorios en juicio, dado que la obtención del documento requerido por el particular mediante una solicitud de acceso a la información, implicaría que el documento adquiriera el carácter de público y quede a disposición de cualquier persona, y ello podría dar lugar a que fuera del escenario procesal la parte quejosa esté en aptitud de obtener el documento y consolidar su defensa, colocando al Banco de México, así como al Comité a que se refiere el artículo 49 de la Ley del Banco de México, en una posición de desventaja frente a su contraparte.
- **Respecto a la fracción IV, relativa a que con su divulgación se menoscaban los derechos**

**del debido proceso:** se actualiza dicho supuesto, ya que divulgar la referida información vulneraría una de las garantías procesales de nivel constitucional como la señalada en el párrafo previo, puesto que, si se proporciona ese documento, se podría afectar el equilibrio del juicio en favor de la contraparte de este Instituto Central y del Comité a que se refiere el artículo 49 de la Ley del Banco de México

Lo anterior, tomando en consideración que debe privilegiarse el eficaz mantenimiento de dicho proceso jurisdiccional en todas sus etapas, específicamente por cuanto hace a la igualdad procesal, evitando de esta forma que se genere una determinada ventaja para alguna de las partes que se traduzca en perjuicio de la otra.

En consecuencia, al cumplirse los requisitos referidos, la información materia de la presente prueba de daño actualiza la causal de clasificación prevista en el **artículo 113, fracción X, de la LGTAIP**, ya que su publicación vulneraría los derechos del debido proceso del Banco Central y del Comité a que se refiere el artículo 49 de la Ley del Banco de México en el juicio a que hemos hecho referencia.

Señalado lo anterior, de conformidad el artículo 104 de la LGTAIP, a través de la presente prueba de daño, se justifica lo siguiente:

- A. Que la divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional;
- B. Que el riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda; y
- C. Que la limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.

Al respecto, por lo que se refiere al inciso A, la divulgación de la información materia de esta prueba de daño representa un riesgo que reviste las características mencionadas en razón de lo siguiente:

**Real**, ya que de revelar o divulgar la documentación que se solicita, se estaría generando una ventaja procesal hacia la contraparte de este Sujeto Obligado en el juicio de amparo aludido, en razón de que podría tener acceso a una información que todavía no es conocida por esta y con ello estaría en la aptitud de implementar indebida y anticipadamente alguna estrategia procesal que repercuta en los intereses del Banco de México y del Comité a que se refiere el artículo 49 de la Ley del Banco de México. Es así que la causal de reserva prevista en los artículos 113, fracción X, de la LGTAIP y 110, fracción X, de la LFTAIP, así como en el Vigésimo noveno de los Lineamientos, se actualiza en este caso toda vez que con su aplicación se protegería la garantía del debido proceso del Banco de México y del citado Comité.

Así también procede la reserva cuando exista la posibilidad de materialización de un efecto nocivo en los derechos al debido proceso, lo que para el caso que nos concierne, acontecería al revelar la información que se pretende reservar con la presente prueba de daño, ya que se reitera, se trata de un documento susceptible de ser requerido u ofrecerse en un juicio en el que precisamente la determinación que se contiene en dicho documento es el acto impugnado, por lo que de hacerse público, podría ser utilizado para construir una estrategia procesal en contra del Banco de México y del Comité a que se refiere el artículo 49 de la Ley del Banco de México.

Además, revelar la información materia de la presente prueba de daño podría vulnerar la

conducción eficaz del procedimiento jurisdiccional, ya que dicha documentación podría llegar a medios de comunicación o agentes de la opinión pública, los que en su caso pueden construir una postura favorable o en contra, que genere presión pública y privada en el ánimo del juzgador.

Al respecto, debe considerarse que, en materia de acceso a la información, no es necesario acreditar la identidad del solicitante, por lo que cualquier persona puede requerir y, consecuentemente, tener acceso a la información que, en su caso, se entregue. Sin perjuicio de lo anterior, al tratarse de una solicitud de acceso a la información en términos de la LGTAIP, la respuesta que se emita para la atención de la misma será un documento de carácter público a la que cualquier persona puede tener acceso, lo cual incluye a la parte quejosa en el procedimiento judicial que ahora nos ocupa. De igual manera, y si bien es irrelevante el carácter con el que ostente manifestarse el solicitante en el texto mismo de su solicitud, ya que la LGTAIP no prevé ningún mecanismo para acreditar la identidad de las personas en solicitudes de acceso a la información y, de hecho, como lo ha establecido el INAI en el criterio de interpretación SO/017/2023, el ejercicio de acceso a información pública no debe condicionarse a que la persona solicitante acredite su personalidad, demuestre interés alguno o justifique su utilización. Atento a lo anterior, al dar publicidad a la información materia de esta clasificación, se le estaría otorgando una ventaja indebida a la contraparte del Banco de México y del Comité a que se refiere el artículo 49 de la Ley del Banco de México en el juicio de amparo en el que fueron señalados como demandados o autoridades responsables, ya que podría intentar utilizar la información materia de clasificación, en menoscabo de los derechos procesales de este sujeto obligado, para diseñar una estrategia procesal en contra del Banco Central y del aludido Comité sin tener derecho a obtener tal información a través de esta vía. Aunado a lo anterior, como se indicó, también existiría la posibilidad de que la información llegue a la opinión pública, lo que podría generar una postura desfavorable a las pretensiones y defensas del Banco Central.

En efecto, el hecho de que el público conozca la información de referencia podría repercutir en que se reste efectividad a las acciones y decisiones que comprenden la estrategia procesal adoptada por el Banco Central y el Comité a que se refiere el artículo 49 de la Ley del Banco de México, influyendo de manera desfavorable para este órgano autónomo; violando así su derecho al debido proceso.

En ese sentido, la vía elegida por el solicitante no es la adecuada para obtener documentos para un procedimiento judicial como es el caso, ya que los sujetos obligados solo pueden actuar ya sea entregando la información, lo que le otorgaría el carácter de pública para cualquier persona, o bien, clasificándola frente al público en general, cuando se actualicen las causales correspondientes. Por ello, y si bien es irrelevante el carácter con el que se ostente la persona solicitante en su solicitud, la información debe clasificarse al actualizarse las causales correspondientes como se expone en la presente prueba de daño.

En este orden de ideas, es importante destacar que las Recomendaciones sobre acceso a la información de la Organización de los Estados Americanos señalan que las excepciones al derecho de acceso a la información deben ser limitadas y selectivas, además exhortan a que toda excepción esté sujeta al interés público.

En ese sentido, el riesgo se actualiza ya que, como se ha acreditado, de revelarse la información objeto de la presente prueba de daño, repercutiría de manera desfavorable en los derechos al debido proceso de este Sujeto Obligado y, consecuentemente, en la decisión que emitan las

autoridades que conozcan del juicio respectivo, afectando los derechos del Banco de México, entre otros, el derecho al debido proceso.

En tal virtud, la información en comento **actualiza la causal de clasificación toda vez que su publicación vulneraría el derecho al debido proceso**, al generar un desequilibrio en la igualdad procesal de las partes y un daño a la libre deliberación del órgano jurisdiccional, vulnerando por ende la impartición de justicia, afectando así, la objetividad e imparcialidad del Juzgador ante el que se lleva el juicio civil.

**2) Demostrable**, toda vez que como ya se mencionó, la información en comento se relaciona con un elemento susceptible de ser ofrecido en juicio como prueba, dado que el acto impugnado se refiere a “...*La determinación de la remuneración ordinaria total líquida anual neta de los miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México, tomando como parámetro máximo al del Ejecutivo Federal que fuese establecida en el PEF 2024...*”, por lo que la revelación de la información requerida por el solicitante, consistente efectivamente en la determinación contenida en el documento que se solicita, afectaría la imparcialidad e independencia del juzgador respecto de la causa, además de que se contravendrían las reglas de cargas procesales establecidas en el litigio, puesto que esta no es la vía para que alguna contraparte pudiera obtenerla.

Al respecto, se insiste que, el divulgar la información que ahora nos ocupa generaría desventajas procesales, además de que de llegar a medios de comunicación y público en general, la opinión pública puede provocar alguna convicción sobre la resolución que en su caso emita la autoridad jurisdiccional.

**3) Identificable**, toda vez que la información proporcionada se relaciona con un elemento susceptible de ser requerido u ofrecido en juicio como prueba y sobre un acto cuya constitucionalidad y legalidad se reclama al Comité a que se refiere el artículo 49 de la Ley del Banco de México, y en vía de consecuencia a este Instituto Central, por lo que su sola revelación podría poner en riesgo el debido desarrollo del procedimiento en el que se encuentra inmerso este órgano constitucional autónomo y el aludido Comité con la finalidad de defender jurídicamente sus intereses y su patrimonio, así como poder cumplir con normalidad sus funciones conferidas constitucional y legalmente.

Por lo que respecta al **inciso B, el riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda**, ya que de publicarse la información se pone en riesgo el uso de la misma, con lo que se afectaría el debido proceso y, consecuentemente, la emisión de un resultado imparcial por el órgano jurisdiccional encargado de resolver el procedimiento en el que es parte el Banco de México, con lo que se afectaría el Estado de Derecho y la defensa de los intereses del Estado Mexicano en el cumplimiento de la CPEUM y las leyes que derivan de esta, bienes jurídicos tutelados cuyo respeto es de interés público.

La información objeto de la presente prueba de daño, no satisface un interés público, ya que al realizar una interpretación sobre la alternativa que más satisface dicho interés, se puede concluir que debe prevalecer el derecho más favorable a las personas, esto es, beneficiar el interés de la sociedad, el cual se obtiene no solo por el cumplimiento de las funciones del Banco de México y del Comité a que se refiere el artículo 49 de la Ley del Banco de México, en apego al marco constitucional y legal aplicable, sino por el respeto irrestricto del derecho al debido proceso consagradas en la propia constitución.

Por su parte, la clasificación de la información **persigue un fin constitucionalmente válido**. En efecto, según lo dispuesto en el artículo 6o., apartado "A", fracción I, de la CPEUM, toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y solo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijan las leyes.

En ese sentido, una razón de interés público para reservar la información materia de esta prueba de daño, es que a través de dicha reserva se evitaría que el Banco de México como órgano constitucional autónomo perteneciente a la Federación, quede expuesto a que se vulnere su derecho a un debido proceso que pueda influir a obtener una resolución desfavorable en un litigio en el que fue señalado como autoridad responsable, así como al Comité a que se refiere el artículo 49 de la Ley del Banco de México, y, a consecuencia de ello, un demérito en sus funciones, lo que le afectaría en el cumplimiento normal de dichas atribuciones, conferidas constitucional y legalmente.

En tal virtud, la reserva de la información persigue un fin constitucionalmente válido, ya que con ella se busca que no se violente la garantía al debido proceso, en atención a las razones expuestas.

Lo anterior ha sido reconocido por la legislación en materia de transparencia y acceso a la información pública, pues los artículos 113, fracción X, de la LGTAIP y 110, fracción X, de la LFTAIP, facultan excepcionalmente a los sujetos obligados a que reserven información cuando su divulgación vulnere el derecho al debido proceso.

Asimismo, la reserva de la información es una medida **idónea** para cumplir el fin constitucionalmente válido, ya que dicha idoneidad presupone la existencia de una relación entre la intervención al derecho y el fin que persigue dicha afectación, siendo suficiente que la medida contribuya en algún modo y en algún grado a lograr el propósito que busca el legislador. En ese sentido, el propio constituyente, en los artículos 6o., apartado A, fracción I, de la CPEUM; así como 113, fracción X, de la LGTAIP y 110, fracción X de la LFTAIP, reconocieron de manera expresa que la clasificación de la información es una medida idónea para proteger la información frente a la afectación que provocaría la actualización de los riesgos señalados.

Por otra parte, la medida consistente en clasificar la información mencionada es **necesaria** ya que, de conformidad con la normatividad aplicable, es la única medida disponible para proteger el fin constitucional perseguido. En efecto, en materia de transparencia y acceso a la información, el mecanismo indicado por la propia normatividad para proteger la información objeto de la presente prueba de daño, lo es la clasificación de la información. Además de que los ordenamientos en materia de transparencia y acceso a la información no proporcionan un medio alternativo menos lesivo a la apertura de la información, para satisfacer el interés público.

Lo anterior es así, toda vez que, de no clasificarse la información, se actualizarían todos los riesgos expuestos; por lo que, en consecuencia, la única alternativa para alcanzar el fin constitucionalmente válido señalado, es la clasificación de la información.



A su vez, por lo que se refiere al **inciso C**, la clasificación de la información que nos ocupa se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio, ya que debe prevalecer el interés público, toda vez que, si bien no se divulga en este momento la información objeto de esta prueba de daño por tratarse de información que de divulgarse podría afectar el debido proceso y en su caso, forme parte de un procedimiento jurisdiccional que no ha causado estado, dicha información será pública en cuanto transcurra el plazo de reserva, o bien, cuando dicho procedimiento cause estado, por lo cual la reserva temporal es el medio menos restrictivo, y con la protección de la información se causa un beneficio mayor al perjuicio que podría generarse a este Banco Central y a la población con la divulgación respectiva.

En virtud de lo anterior, la reserva en la publicidad de la información resulta la forma menos restrictiva disponible para evitar un perjuicio mayor que podría afectar la conducción del proceso en el que el Banco de México y el Comité a que se refiere el artículo 49 de la Ley del Banco de México son parte.

Por tanto, vistas las consideraciones expuestas en el presente documento, se solicita la reserva de dicha información, por un plazo de **5 años** a partir de la fecha de reserva, toda vez que no es posible determinar un estimado del tiempo que duran los juicios de amparo, **sin perjuicio de que la información se desclasifique, una vez que dicho proceso cause estado y no subsista causa alguna de clasificación.**

Lo anterior, máxime que la presente clasificación no contradice los artículos 8o. y 112 de la LFTAIP, toda vez que no se encuentra relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de *lesa humanidad*, de conformidad con el derecho nacional o los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

Por lo expuesto, con fundamento dispuesto por los artículos 6o., párrafo cuarto, apartado A, fracciones I y VIII, párrafo sexto, y 28, párrafos sexto y séptimo, de la CPEUM; 1, 100, 103, 104, 105, 108, último párrafo, 109, 113, fracción X, y 114, de la LGTAIP; 1, 97, 100, 102, 103, 105, último párrafo, 106, 110, fracción X, y 111, de la LFTAIP; 2o., 4o. y 5o., de la Ley del Banco de México; 4, párrafo primero, 8o., y 10, del Reglamento Interior del Banco de México; así como Primero, Segundo, fracción XIII, Cuarto, Octavo, Vigésimo noveno, Trigésimo tercero, y Trigésimo cuarto, de los Lineamientos, la información relativa a [...] ***el acta del comité integrado por el Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y por dos personas nombradas por el Secretario de Hacienda y Crédito Público de la sesión en la que se determino el monto máximo de remuneración para los miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México, para el año 2024.*** [...], debe ser clasificada como reservada, al tratarse de ***“Información relativa a medios probatorios cuya divulgación puede vulnerar los derechos del debido proceso”***, toda vez que su divulgación vulneraría el derecho al debido proceso y, consecuentemente, la conducción de un procedimiento jurisdiccional en curso, en el que son parte este Instituto Central y el Comité a que se refiere el artículo 49 de la Ley del Banco de México, que aún no ha causado estado.

Documento firmado digitalmente, su validación requiere hacerse electrónicamente.  
Información de las firmas:

FECHA Y HORA DE FIRMA	FIRMANTE	RESUMEN DIGITAL
--------------------------	----------	-----------------